

Bolivia: Votación en medio de la crisis

Francisco Belaunde

Los bolivianos están llamados a las urnas el 17 de agosto para elegir a su presidente y a sus parlamentarios. Contrariamente a los comicios de los últimos años, el partido Movimiento al Socialismo (MAS), que ha dominado la vida política en el país altiplánico, gobernándolo 18 de los últimos 19 años, aparece, según las encuestas, con nulas posibilidades de conservar el poder. Ello se debe, en primer lugar, a la grave crisis económica resultante de las políticas que fueron aplicadas.

El gobierno de Evo Morales, presidente entre 2006 y 2019, decretó la propiedad del Estado de los hidrocarburos extraídos por las empresas extranjeras. Estas tuvieron entonces que conformarse con negociar con el gobierno una remuneración por su actividad. Con esa medida, sumada a los buenos precios internacionales de los hidrocarburos en los primeros años de este siglo, el Estado aumentó fuertemente sus ingresos y Morales pudo implementar una política distributiva que aumentó su popularidad y le permitió hacerse reelegir. El problema fue que, si bien, las empresas no se fueron del país, por las grandes inversiones que habían realizado, perdieron todo incentivo para explorar y buscar nuevos yacimientos. La consecuencia inevitable se ha dado ahora: Bolivia se quedó casi sin gas y, por lo tanto, sin su principal fuente de divisas.

Al mismo tiempo, el gobierno del MAS fue incapaz de aprovechar las enormes reservas de litio del país que son las mayores del mundo. Al contrario de Chile y Argentina, Bolivia no exporta prácticamente nada de ese mineral estratégico.

Si, a lo anterior, se añade la escasa inversión extranjera, y el limitado acceso al crédito internacional, se llega a la situación actual de falta de divisas, y, por lo tanto, de dificultad para importar hasta lo más básico como los combustibles.

Las protestas de la población no se hicieron esperar y se han producido huelgas y bloqueos de carreteras. El descalabro económico se dio en paralelo a la implosión del MAS, generada por la pugna entre Evo Morales y el presidente Luis Arce por la candidatura para los próximos comicios. El distanciamiento entre ambos comenzó a gestarse a mediados de 2023 y fue agravándose hasta llegar a la ruptura el año siguiente. Arce obtuvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prohibiera a Morales volver a postular, y, además, tomó el control del partido, alejando a su rival. A pesar de sus intentos, Morales no pudo conseguir que otra agrupación intentara inscribirlo como su candidato, antes del fin del plazo para registrar las postulaciones. Sin embargo, el líder cocalero no da su brazo a torcer y organizó una serie de bloqueos de carreteras que, además de causar grandes pérdidas económicas, provocó la muerte de 6 personas, entre las cuales, se cuentan 4 policías. Si bien la medida fue levantada, Morales no se rinde, y sus partidarios han amenazado con sabotear los comicios, impidiendo que la gente vote en las zonas

rurales. En síntesis, han decretado que, si Morales no es candidato, no habrá elecciones. Y, efectivamente, existe el riesgo de que pueda llegarse a una situación de violencia tal, que no puedan realizarse, por lo menos en gran parte del país.

Por cierto, la división del MAS llevó a que su representación parlamentaria, que gozaba de la mayoría absoluta, se fracturara. La facción “evista” se alió a la oposición y bloqueó la agenda legislativa del gobierno. Peor aún, el Congreso quedó en gran parte paralizado, no pudiendo siquiera sesionar por falta de quorum, debido a las maniobras de las bancadas cuando querían evitar que determinados temas o proyectos fueran discutidos. Ello llevó a que se postergara durante varios meses, entre otros aspectos, la discusión para la aprobación de los pocos créditos obtenidos por el gobierno, como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US\$ 30 millones.

El conflicto condujo también a que se viera afectado el poco común sistema boliviano de designación de los miembros de las más altas instancias judiciales, como el TCP, mediante sufragio universal. Se retrasó la aprobación por los legisladores de las candidaturas y, por lo tanto, los comicios, que debían realizarse el 2023, tuvieron lugar, parcialmente, en diciembre del año pasado. Ello llevó a que una parte significativa de los magistrados se “autoprorrogaran” en sus cargos, tras el vencimiento de sus mandatos, provocando el rechazo de numerosos sectores y aumentando la sensación de caos.

Por otro lado, el gobierno denunció a Evo Morales por terrorismo, lo que se suma a la orden de arresto que pesa sobre el exmandatario en el marco de una denuncia por pedofilia. Sin embargo, no ha podido ser aprehendido debido a la protección de que goza en su bastión del Chapare, en el departamento de Cochabamba.

Lo curioso es que, al final, Arce renunció a su candidatura, muy probablemente porque la grave situación a la que ha llevado al país, hacía imposible que pudiera triunfar. Ni siquiera buscará un escaño en el Senado, como se planteó en un momento. Su ex ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo lo ha reemplazado como abanderado del MAS, pero, según una encuesta del diario El Deber, tiene menos del 2% de las intenciones de voto. En cambio, Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado de apenas 36 años, y ex militante del MAS, que lanzó su candidatura con otra agrupación, se sitúa tercero en las preferencias, con el 14%.

Los que encabezan las encuestas, son dos candidatos de derecha o centro derecha. El primero es el empresario y exministro Samuel Doria Medina, con 24%, y el segundo es el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con 22%. Es decir, todo parece indicar que Bolivia elegirá, después de muchos años, un presidente que no será de izquierda, aunque es preciso anotar que un 27% declaró no saber por quién votar.

De confirmarse las tendencias de las encuestas en los comicios, y, de acuerdo a las promesas de campaña, el próximo gobierno buscará sin duda corregir y revertir lo más que pueda las políticas del MAS. Parecen inevitables medidas dolorosas de

ajuste para reducir la inflación que, actualmente, ronda el 15% anual, así como el déficit fiscal de alrededor del 9% del PBI, y la deuda que supera el 60% del PBI. Un acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) es muy probable. Ciertamente, se irá también hacia la liberalización de la economía, lo que debería incluir la revisión del modelo de explotación de hidrocarburos para fomentar la inversión en exploración y recuperar la posición de Bolivia como exportador de gas. En lo que se refiere al litio, se buscaría negociar nuevos contratos, dejando de lado los firmados por el actual gobierno y que han sido muy cuestionados, al punto de que su aprobación está estancada en el Parlamento.

En materia política, se puede prever la liberación de opositores como la expresidenta interina Jeannette Añez y el ex gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, cuyos procesos han sido cuestionados por no respetar estándares internacionales. Es previsible que se busque revisar también el sistema de autonomías, que no ha funcionado plenamente; los departamentos siguen dependiendo fuertemente del gobierno central en materia financiera. Por otro lado, podría también plantearse la Constitución actual inspirada en la visión fuertemente estatista del MAS.

En todo caso, el camino del próximo gobierno tendrá sin duda muchos obstáculos y los problemas por resolver son inmensos. La situación de Bolivia es crítica. Se puede esperar maniobras obstruccionistas, en especial de Evo Morales, que declaró recientemente, respecto de un posible gobierno de derecha: "A ver si aguanta". Ello ha sido interpretado como una amenaza. Y es que el expresidente ha demostrado con creces que no cree en la democracia y que no tiene escrúpulos a la hora de perseguir sus objetivos.

Belaunde, F. (2025, junio-julio). Bolivia: Votación en medio de la crisis. *Boletín virtual Panorama Mundial*. Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://idei.pucp.edu.pe/panorama-mundial/>